

Informe del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa a Nivel Internacional

MÉXICO

La Constitución garantiza la libertad de culto, y otras leyes y políticas contribuyeron a la generalmente libre práctica de la religión.

El gobierno en general respeta este derecho en la práctica; sin embargo, existen algunas restricciones a nivel local en ciertas áreas. No hubo cambio en la situación del respeto a la libertad religiosa por parte del gobierno durante el período que abarca este informe.

Hubo algunos informes sobre abusos o discriminación de la comunidad, con base en afiliación, credo o culto, usualmente en pequeñas poblaciones rurales en el sur del país. La mayoría de tales incidentes ocurrieron en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, y en menor medida en el Estado de México, Michoacán, Veracruz y Nayarit. Funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes evangélicos y católicos romanos estuvieron de acuerdo en que las raíces de estos conflictos frecuentemente se encuentran en una combinación de disputas políticas, étnicas o por tierras, las cuales con frecuencia están relacionadas con los “usos y costumbres” tradicionales de las comunidades indígenas.

El gobierno de los Estados Unidos dialoga sobre la problemática de la libertad religiosa con el gobierno mexicano como parte de su política general de promoción de los derechos humanos.

Sección I. Demografía Religiosa

El país tiene un área de 1,964,467 kilómetros cuadrados y su población es de aproximadamente 109 millones. De acuerdo con el censo gubernamental del año 2000, aproximadamente el 88 por ciento de los encuestados se identifican por lo menos nominalmente como católicos. Se estima que hay alrededor de 11 mil templos católicos y 14 mil sacerdotes y monjas católicas. Se estima también que otros 90 mil seglares trabajan en el sistema de la iglesia católica. Otros grupos religiosos que representan menos del 5% de la población incluyen: evangélicos (pentecostales, neopentecostales y raíces pentecostales), protestantes “históricos” (definidos por el gobierno como presbiterianos, bautistas, metodistas, nazarenos, menonitas y otros), adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), musulmanes y judíos.

La Dirección General de Asociaciones Religiosas (DGAR), de la Secretaría de Gobernación, registró 169 asociaciones evangélicas y protestantes tradicionales. Se desconoce el número exacto de iglesias y pastores evangélicos y protestantes, y son escasas las estadísticas con respecto a sus miembros. Las cifras oficiales en ocasiones son diferentes de lo que los grupos religiosos manifiestan. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reclama una membresía a nivel nacional de entre 600 mil y 700 mil personas; sin embargo, de acuerdo con el censo del año 2000, sólo 488,945 personas se

identificaron como tales. También de acuerdo con el censo del 2000, sólo 205,229 personas se identificaron como mormones, en tanto que la Iglesia Mormona manifestó una membresía nacional de aproximadamente 1.2 millones. Los protestantes se concentran principalmente en el sur. En el estado de Chiapas, el 21.9 por ciento de los censados en el año 2000 se identificaron como protestantes. Sin embargo, algunos grupos evangélicos protestantes manifiestan que sus correligionarios constituían un porcentaje mucho mayor de la población. La Barra Nacional de Abogados Cristianos reportó que en noviembre de 2008 solicitaron que el Secretario de Gobernación incluyese una categoría para los cristianos no evangélicos en el próximo censo, pero no ha recibido una respuesta.

La comunidad judía manifiesta una membresía de aproximadamente 50 mil personas, cuya gran mayoría vive en la Ciudad de México, si bien hay congregaciones organizadas en Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. Hay una pequeña población musulmana chiita en la ciudad de Torreón, Coahuila, y se estimó la existencia de 300 musulmanes en el área de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Algunas comunidades indígenas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán practican una religión sincrética que conjunta creencias religiosas católicas y mayas prehispánicas.

En algunas comunidades, particularmente en el sur, hay una correlación entre la política y la religión. Hay informes de la existencia de un pequeño número de líderes locales que manipulan las tensiones religiosas en sus comunidades para su propio beneficio político o económico, especialmente en Chiapas.

Sección II. Situación de la Libertad Religiosa

Marco Legal / Político

La Constitución garantiza la libertad de religión, y otras leyes y políticas contribuyeron a la generalmente libre práctica de la religión. El gobierno es laico.

El artículo 24 de la Constitución establece que todas las personas son libres de profesar las creencias religiosas de su elección y practicar sus ceremonias y actos de culto. El Congreso no puede promulgar leyes que establezcan o prohíban una religión. La Constitución también establece la separación de la Iglesia y el Estado. La Constitución prohíbe que los miembros del clero ocupen cargos públicos, externen opiniones políticas partidistas, apoyen a candidatos a cargos políticos o que se opongan a las leyes o a las instituciones del Estado. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público define las herramientas administrativas que protegen el derecho a la libertad religiosa. La Constitución prohíbe toda forma de discriminación, incluida la que se pudiera ejercer por cuestiones de religión.

La ley permite que los grupos religiosos operen informalmente sin registrarse ante el gobierno. Sin embargo, si una comunidad religiosa desea asumir personalidad jurídica, misma que se requiere para suscribir contratos y comprar o rentar propiedades, debe registrarse como asociación religiosa ante la DGAR. El proceso de registro es sencillo.

Las estadísticas más recientes mostraron que existen 7,074 asociaciones religiosas registradas, la mayoría de las cuales eran protestantes evangélicas. Durante el período que abarca este informe, la DGAR registró 202 asociaciones, algunas de las cuales habían solicitado registro con anterioridad. Además, al finalizar dicho período, habían solicitudes pendientes, ya sea porque requerían documentación adicional o por no satisfacer los criterios de registro.

Para obtener registro como asociación religiosa, un grupo debe articular sus doctrinas fundamentales y creencias religiosas, no estar integrado con fines principales de lucro ni promover actos que sean físicamente dañinos o peligrosos para sus miembros. Los grupos religiosos deben contar con registro para solicitar permisos oficiales de construcción, para recibir exenciones de impuestos, y para realizar reuniones religiosas fuera de su lugar de culto.

Las asociaciones religiosas deben notificar al gobierno su intención de realizar una reunión religiosa fuera del lugar autorizado para el culto. Usualmente se reciben miles de notificaciones de este tipo cada año y el gobierno aprueba esas solicitudes de manera rutinaria. Las asociaciones religiosas no pueden realizar reuniones políticas de ninguna índole

La DGAR promueve la tolerancia religiosa e investiga los casos de intolerancia. La DGAR ha traducido la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a 11 lenguas indígenas, incluyendo el purépecha del estado de Michoacán, hasta la fecha de elaboración de este reporte, con la intención de llegar a un total de 16. Cuando las partes presentan una disputa ante la DGAR, ésta intenta mediar una solución. Si esta mediación fracasa, las partes pueden someter nuevamente el problema a la DGAR con el compromiso de acatar el arbitraje. Si las partes no convienen en este procedimiento, una u otra pueden optar por buscar resarcimiento judicial. Los funcionarios municipales y estatales en lo general responden y ayudan a mediar disputas entre comunidades. Sin embargo, cuando la mediación no ha resultado en solución, los funcionarios no siempre han sido enfáticos en la búsqueda de remedios legales contra los líderes locales infractores.

El gobierno federal coordina los asuntos religiosos a través de la Secretaría de Gobernación. La mayoría de los estados cuentan con oficinas dedicadas a asuntos religiosos; Chiapas, Guerrero y Nuevo León tienen sus propias subsecretarías para asuntos religiosos.

De ocho días feriados oficiales, la Navidad es el único día de asueto religioso; sin embargo, la mayoría de los empleadores conceden el Jueves Santo, el Viernes Santo, el día de muertos, el día de la Virgen de Guadalupe y Nochebuena como días feriados con goce de sueldo.

El gobierno exige a los grupos religiosos que soliciten permiso para la construcción de sus edificios o para convertir los ya existentes en lugares de culto. Todos los edificios religiosos construidos después de 1992 son propiedad de la agrupación que los haya

construido. Todos los edificios religiosos construidos antes de 1992 están clasificados como patrimonio nacional y son propiedad del Estado, por lo que están exentos del pago de impuestos.

Los grupos religiosos no pueden ser propietarios o administrar estaciones de radio o televisión. Se requiere permiso del gobierno para transmitir programación religiosa en las transmisiones de la radio o televisión comerciales.

La Constitución establece que la educación pública debe ser laica. Las asociaciones religiosas, sin embargo, tienen la libertad de tener sus propias escuelas privadas. La ley no prohíbe ni apoya explícitamente la educación casera por razones religiosas a nivel primaria; sin embargo, para tener acceso a la educación secundaria, es preciso haber asistido a una escuela primaria debidamente acreditada. La educación secundaria en el hogar se permite sólo después de haberse completado la educación elemental en una escuela primaria debidamente acreditada.

La ley no prohíbe ni apoya explícitamente el trabajo del clero en instituciones públicas, tales como cárceles u hospitales.

Restricciones a la Libertad Religiosa

El Gobierno generalmente respetó la libertad religiosa en la práctica. Durante el periodo del reporte, no hubo un cambio significativo en el respeto a la libertad religiosa por parte del gobierno. La mayoría de la discriminación se dio en los niveles estatal y local. Los gobiernos estatal y municipal protegen generalmente la libertad de culto; sin embargo, algunos líderes de comunidades locales y autoridades, particularmente en el sur, presuntamente utilizan la afiliación a la religión como un pretexto en disputas de índole política, étnica y territorial.

El Gobierno Federal limita el número de visas que pueden ser concedidas a cada grupo religioso; sin embargo, el proceso de solicitud es rutinario y sencillo. Durante el periodo del reporte, el gobierno expidió 2,408 visas a misioneros.

En mayo de 2009 en La Trinitaria, Chiapas, una organización local de derechos religiosos reportó que autoridades locales prohibieron a 70 protestantes evangélicos, incluyendo 30 niños, la compra de artículos comestibles básicos parte de un programa gubernamental para familias. Estas acciones fueron presuntamente en represalia a la negativa de las familias de participar en las festividades locales que son parte de las celebraciones católicas. En 2008 se les suspendieron los servicios públicos a estas familias por las mismas razones.

En julio de 2008 la prensa reportó que las autoridades locales amenazaron a familias metodistas en Zopilotepec, Guerrero, con la pérdida de su iglesia, maltrato físico a sus niños y su expulsión de la comunidad.

Abusos Contra la Libertad Religiosa

El gobierno generalmente respetó la libertad religiosa en la práctica; sin embargo, mecanismos de procuración de justicia poco efectivos han permitido que líderes de comunidades en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y algunos otros estados, pongan en práctica la discriminación en contra de personas basándose en sus creencias religiosas. Funcionarios del gobierno federal y local en muchas ocasiones no han castigado a los responsables de actos de intolerancia religiosa. La DGAR trabajó activamente con funcionarios de gobierno estatal y local; sin embargo, las investigaciones criminales generalmente tienden a ser lentas.

En enero de 2009 en San Juan Chamula, Chiapas, de acuerdo a reportes noticiosos, católicos destruyeron presuntamente los cimientos de una iglesia evangélica en construcción, y autoridades locales encarcelaron al pastor de la iglesia.

En noviembre de 2008 las autoridades locales, según se dice, detuvieron a tres líderes evangélicos--Roberto Martínez Santiago, Cristóbal Pedro Martínez Jerónimo y Benito Jerónimo Jerónimo – en Santiago Teotlaxco, Oaxaca, por dos días, debido a que se rehusaron a contribuir o participar en las festividades locales durante las celebraciones católicas.

De acuerdo con reportes de noticias de 2007, autoridades locales de Chiapas encarcelaron a Juan Mendez después de su conversión al cristianismo evangélico y lo liberaron a la mañana siguiente.

Conversión Religiosa Forzada

No existen reportes sobre conversiones religiosas forzadas, incluyendo casos de menores ciudadanos de los Estados Unidos que hubieran sido secuestrados o ilegalmente sacados de los Estados Unidos, o que no se hubiera permitido su regreso a los Estados Unidos.

Sección III. Estatus del Respeto Social a la Libertad Religiosa

Se reportaron algunos abusos de la comunidad o discriminación basada en afiliaciones religiosas, creencias o prácticas, usualmente en poblaciones pequeñas y rurales del sur de México. La mayoría de los incidentes ocurrieron en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, y en menor medida en estados como el Estado de México, Michoacán, Veracruz y Nayarit. Con frecuencia se citaron diferencias religiosas como la causa de dichos incidentes. Sin embargo, las disputas casi siempre involucraban varios factores, incluyendo diferencias étnicas, disputas por tierra y luchas por el poder político y económico.

En diversas regiones del centro y del sur, algunos líderes de comunidades indígenas predominantemente católicas ven a los grupos evangélicos como influencias foráneas que no son bienvenidas y como amenazas económicas y políticas. Estos líderes algunas veces son condescendientes, y otras ordenan el acoso o la expulsión de individuos que en su mayoría forman parte de grupos evangélicos protestantes.

Organizaciones locales de derechos humanos destacaron que los conflictos estaban incrementando debido a la falta de intervención del gobierno estatal. Al igual que en reportes anteriores, los líderes comunitarios sancionaron a los evangélicos por resistirse a participar en las festividades locales o rehusarse a trabajar los domingos. Los evangélicos se quejaron debido a cortes en el suministro de agua, su expulsión de los pueblos, la pérdida de los derechos de la comunidad y posesiones personales, golpizas, amenazas de muerte, la quema de iglesias y casas, o que se les negaran beneficios sociales de programas gubernamentales por su religión. Esto último fue particularmente común en Chiapas, donde muchos de los residentes profesan una única y milenaria forma de sincretismo entre el catolicismo y sus costumbres indígenas. La pobreza endémica, las disputas por la tenencia de la tierra y la falta de oportunidades educativas contribuyen a estas tensiones, que algunas veces llegan a tornarse violentas.

Los evangélicos usualmente se rehusaron a hacer las donaciones financieras que demandan las normas comunitarias y que sirven, en parte, para financiar las festividades locales en los días santos del catolicismo. La Barra Nacional de Abogados Cristianos reportó que tuvo que cerrar sus oficinas en Chiapas debido a cuestiones de seguridad, y que por tal motivo no pudo proveer información sobre los avances en los casos de intolerancia religiosa sin resolver, en contra de los cristianos evangélicos de Chiapas, citados en el reporte anterior. La Barra Nacional reportó que al terminar el periodo que se reporta, había 50 casos sin resolver en el país, sin incluir a Chiapas.

En enero de 2009, de acuerdo con reportes de prensa, los servicios de electricidad y agua de 74 familias evangélicas fueron suspendidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Manifestantes rodearon el palacio de gobierno a manera de protesta.

Existen reportes de que en diciembre de 2008, grupos de católicos y autoridades locales de San Nicolás, Ixmiquilpan, impidieron el entierro de una mujer evangélica de 59 años, Otilia Corona, en el cementerio del pueblo. Aunque su familia realizó una contribución equivalente a 260 dólares (3,400 pesos), para el mantenimiento del cementerio, no les fue permitido enterrarla en ese lugar. Ella fue enterrada en su propia casa, violando las leyes generales de salubridad.

En Zinacantán, Chiapas, un grupo de católicos, supuestamente con el apoyo de las autoridades del pueblo, amenazaron con tomar las armas en contra de evangélicos que se rehusaron a contribuir con las festividades religiosas locales. El 19 de noviembre de 2008, protestantes evangélicos del pueblo realizaron una conferencia de prensa denunciando las amenazas.

El 13 de junio de 2009, el sacerdote católico Habacuc Hernández Benítez y dos seminaristas (Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón) fueron asesinados en Arcelia, en el estado de Guerrero. Aunque el móvil no quedó claro, algunos medios reportaron que los asesinatos estaban ligados a las declaraciones del Arzobispo de Durango en contra de narcotraficantes.

El 2 de septiembre de 2008, el sacerdote católico Gerardo Manuel Miranda Ávalos fue asesinado, cuando desde un coche en movimiento le dispararon en la entrada de una escuela católica en Los Reyes, Michoacán. En mayo de 2008 el sacerdote católico Julio César Mendoza Acuma murió en un hospital en la Ciudad de México, después de un ataque perpetrado en su residencia la noche anterior, por al menos tres individuos. En enero de 2008, el Colegio de Abogados Católicos, un grupo lego encargado de proveer servicios de consultoría legal a la iglesia católica, solicitó que autoridades del Distrito Federal, Hidalgo y Aguascalientes informaran sobre los avances en las investigaciones del asesinato a manos de criminales de tres sacerdotes católicos, Humberto Macías Rosales, Fernando Sánchez Durán y Ricardo Junious, en 2007. Todos estos casos se mantenían en investigación a la fecha de elaboración de este reporte.

La DGAR declaró que recibió tres reportes de intolerancia religiosa en el país, durante el periodo del reporte, y que dos de los 14 conflictos pendientes fueron resueltos. Funcionarios de gobierno, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y grupos ecuménicos religiosos continuaron los diálogos sobre los incidentes de intolerancia para promover la armonía social. El Consejo Ecuménico de la Ciudad de México incluyó a representantes de un amplio espectro de grupos religiosos. También se establecieron consejos ecuménicos en Chiapas, Nuevo León y Yucatán.

Sección IV. Política del Gobierno de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos trata los asuntos de libertad religiosa con el gobierno mexicano como parte de su política integral de promover los derechos humanos. Representantes de la Embajada de Estados Unidos se reunieron con funcionarios gubernamentales a cargo de asuntos religiosos e indígenas, así como de derechos humanos, a nivel federal y estatal. Funcionarios de la Embajada también se reunieron con miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales.

* * * * *